

Nataly Foscaches natalyfoscaches@yahoo.com.br

Los condenados de la tierra

*Neimar Machado de Sousa**

**Neimar Machado de Sousa, Karai Guaingue, tiene un doctorado en educación por la UFSCar y es profesor de geo-historia colonial en la Escuela Indígena Intercultural – FAIND de la Universidad Federal de la Grande Dourados (UFGD) en Dourados - MS.*

Coordina los servicios de Documentación e Información sobre los Pueblos Indígenas. E-mail: neimarsousa@ufgd.edu.br

La lista de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul, Brasil, es tan severa y extensa que se pueden clasificar en varias categorías: la inseguridad alimentaria; el desplazamiento interno de sus territorios tradicionales para las reservas indígenas; la violencia contra las mujeres en las áreas recuperadas y en las reservas indígenas, creadas por el gobierno brasileño; la contaminación del agua por los desechos tóxicos; la violencia simbólica representada por la quema de objetos sagrados, los “Xiru”; los asesinatos; el trabajo esclavo; la explotación sexual de menores de edad; los niños que no reciben educación escolar o atención médica.

El estado de Mato Grosso do Sul es una de las 27 unidades federativas de Brasil, ubicada en la región centro-oeste del país, en la frontera de Paraguay y Bolivia. El área total del Estado es de 35 millones de hectáreas, y mientras el rebaño de 23 millones de bovinos ocupa el 65% de todo el territorio, la población Guaraní y Kaiowá, desplazada de forma sistemática de sus tierras desde 1915, en la actualidad ocupa sólo el 0,08%, es decir, 30.000 hectáreas. En los años 90, el cultivo de la caña de azúcar para producir azúcar y alcohol conllevó un incremento en la presión sobre las comunidades indígenas con la intensificación de asesinatos y suicidios. Entre 2003 y 2015, 585 indios se suicidaron y 390 fueron asesinados en el Estado. Sin embargo, estos casos son bastante desconocidos por la población del estado, debido al silencio de los medios de comunicación controlados por sectores afines a los grandes latifundistas.

La población indígena del Estado es de 71 mil personas, y los casos más graves de violencia afectan a los Guaraní y Kaiowá, que consiste en uno de los cinco mayores grupos étnicos de Brasil, cuya población total es de 45 mil personas. A pesar del genocidio de los 9/10 de la población indígena de Brasil durante los cinco siglos de colonización, el país sigue siendo el país con la mayor diversidad étnica del continente, con 310 pueblos indígenas. No sabemos por cuánto tiempo.

En los últimos meses, la situación de violencia contra las comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul se ha deteriorado de tal forma que en una de las tierras reivindicadas por los autóctonos, Nhandaru Marangatu (municipio de Antonio João/Mato Grosso do Sul), las fuerzas armadas tuvieron que intervenir para asegurar la vida de los indios Kaiowá y Guaraní después del asesinato del líder indígena, Simião Vilhalva (24 años), por pistoleros contratados por latifundistas que poseen fincas en tierras identificadas como indígenas. Bajo el argumento de que los indígenas incendiarían la ciudad, el sindicato rural incitó públicamente la discriminación hacia los Pueblos Indígenas. Parlamentares llegaron a participar de las reuniones del sindicato rural y acompañaron los latifundistas hasta la zonas de conflicto. Hasta el día de hoy, una parcela de la población indígena del municipio sigue impedida de comprar alimentos en los establecimientos comerciales de Antonio João, lo que está generando una grave crisis humanitaria por la falta de alimentos. También los niños en edad escolar fueron impedidos de tomar el autobús escolar para ir a la escuela.

Entre las causas de esta situación está la expulsión de los indígenas de sus tierras promovido por el Gobierno Federal durante la dictadura militar. Los líderes indígenas que desde entonces intentan romper el silencio son amenazados de muerte y sufren ataques paramilitares como, por ejemplo, la embestida cometida contra la comunidad de Guaiviry (Aral Moreira/Mato Grosso do Sul), que terminó en la muerte y desaparición del cuerpo del cacique Nisio Gomes. Para apurar el caso, la Asamblea Legislativa del Estado instaló la Comisión de Investigación que al final terminó por echar la culpa de la creciente violencia a los líderes indígenas y sus aliados, demostrando de esta forma la parcialidad del Estado brasileño en defensa del agronegocio y la correspondiente producción de las commodities agrícolas para el mercado internacional.

De acuerdo a la información gubernamental (Renai, 2015), Mato Grosso do Sul sacrifica a 4,6 millones de cabezas de ganado por año, es decir, 12.000 por día. En los últimos años fueron instaladas 28 nuevas fabricas para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar que se suman a las 14 industrias ya existentes. La producción de soya es de 5 millones de toneladas al año, generando así un enorme mercado para insumos agrícolas de empresas multinacionales. La creciente inversión de empresas y bancos en estos sectores está entre los responsables por el aumento de la violencia contra los Pueblos indígenas, la reducción de los territorios tradicionales y la explotación del trabajo indígena en el corte de la caña de azúcar. La omisión del Estado brasileño en cumplir lo establecido por la Constitución Federal de 1988 (que prevé la homologación y la demarcación de las tierras de ocupación tradicional indígena), además del retraso en la identificación de los territorios indígenas, permite que el genocidio se perpetúe diariamente.